

RÍO DE JANEIRO: DE LAS MIELES DEL OLIMPO A LA DESILUSIÓN



Anna Ayuso

Investigadora sénior, CIDOB

La celebración de las Olimpiadas de 2016 en Rio de Janeiro no puede desvincularse de la coyuntura nacional e internacional de Brasil en el año 2006 cuando se presentó y 2009 cuando se consiguió la nominación. Brasil vivía una década de crecimiento económico y prosperidad con mejoras sociales internas. Ese auge se proyectó incrementando su rol en la arena internacional con una política exterior reivindicativa de potencia emergente. Brasil reclamó protagonismo en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Seguridad o el G20. Con sus socios BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) defendía la revisión de un sistema internacional que privilegia a las potencias tradicionales. Al tiempo ampliaba alianzas con el llamado Sur global y lideraba la cooperación regional en Sudamérica. Como otras potencias emergentes, la celebración de megaeventos deportivos le permitía potenciar su prestigio internacional mientras generaba empleo y contentaba a la población.

Tras la concesión a Brasil del Mundial de Fútbol de 2014, la nominación de Río como sede olímpica provocó el entusiasmo del entonces presidente Lula da Silva y de los ciudadanos. Río había postulado seis veces sin éxito (la primera para los juegos de 1936 y la última en 2012). Parecía confirmarse lo que anunció *The Economist* y reiteró el presidente Lula tras el descubrimiento del megacampo de petróleo del Presal: ¡Dios era brasileño! Sin embargo, errores de cálculo y circunstancias sobrevenidas han hecho que, ante su inauguración, las Olimpiadas no generen entusiasmo en Brasil, sino críticas.

Promesas incumplidas. En la candidatura olímpica pesó más la geopolítica que los cálculos económicos. Aun así, se esperaba que los juegos favorecieran inversiones e impulsaran la Marca Brasil. Para Río de Janeiro era la oportunidad de realizar reformas urbanísticas, recuperando barrios degradados, ampliando espacios habitables e introduciendo medidas ambientales. Pero, a pesar del enorme esfuerzo económico realizado, los resultados no han sido los esperados.

La enorme operación urbanística para rehabilitar la zona centro no consiguió atraer suficientes inversores y dejó atrapados en operaciones

especulativas a pequeños ahorradores y pensionistas. La Villa Olímpica de la Barra de Tijuca se convirtió en la mayor inversión inmobiliaria, desplazando a población humilde para instalar un barrio exclusivo. Muchos de los desalojados de las favelas más céntricas no consiguieron vivienda social alternativa. Los precios de la vivienda se dispararon. Los medios de transporte siguen colapsados y caros. La nueva línea de metro no se terminó y pretenden restringir su uso a los espectadores durante las Olimpiadas. La espectacular ciclovía sobre el acantilado de la costa quebró arrojando al vacío dos víctimas mortales.

Las sedes olímpicas están mayoritariamente en la rica zona sur de Río. Tal como ocurrió con los estadios sembrados por el país durante los mundiales, las infraestructuras olímpicas no cuadran con las necesidades futuras de la población. La descontaminación de la Laguna tuvo que dejarse a medias por falta de tiempo y costes excesivos. Como consecuencia, la población siente que estos juegos traen más inconvenientes que beneficios.

Problemas no evitados. Los problemas asociados a la construcción de las instalaciones e infraestructuras constatadas en anteriores Olimpiadas se repitieron en Río. No faltaron costes excesivos por retrasos y poca previsión así como adjudicaciones dudosas. El presupuesto tuvo que ser revisado; en 2009, se calculaba en unos 28.800 millones R\$ pero, en enero de 2016, ya alcanzaba alrededor de 39.100 millones de R\$ (9.775 millones de euros). Aunque es mucho menor coste que Londres o Shanghái, muchos de los sobrepagos se achacan a la corrupción y los sobornos vinculados a las grandes constructoras –como Odebrecht– y a Petrobras, cuyos dirigentes están siendo investigados y que ha implicado a centenares de políticos. El Estado de Río, que confió excesivamente en los yacimientos del Presal ha caído en bancarrota debido al desplome de los precios del petróleo y el desinterés de los inversionistas. Aunque el Gobierno federal ha asumido los costes necesarios para terminar las obras, debido al endeudamiento, el Gobierno del Estado carioca se ha visto obligado a reducir servicios públicos y a retrasar pagos.

La endémica inseguridad de la ciudad de Río fue combatida y reducida, pero no eliminada. Las favelas liberadas por el Ejército y la policía desplazaron a la periferia a las bandas criminales, pero sin erradicarlas. Aunque el terrorismo internacional no haya golpeado Brasil –tras los atentados de París, Bruselas y Turquía–, un evento internacional como las Olimpiadas hace saltar las alarmas. La seguridad incrementará los costes y supondrá medidas que afectarán a la vida cotidiana de la población. Las protestas que acompañaron los mundiales de fútbol pueden reproducirse en un contexto de descontento y polarización social.

Circunstancias sobrevenidas. Frente a los problemas previsibles, no era concebible que antes de las Olimpiadas Brasil se sumiera en una triple crisis nacional. El país entró en una crisis económica con dos años consecutivos de recesión (-3,8% del PIB en 2015). El creciente déficit fiscal (más del 10%) debe financiarse con endeudamiento a un alto interés por la caída en la calificación de las agencias de *rating*. La débil actividad económica aumentó el desempleo y una inflación anual del 10% golpea a las clases medias y menos favorecidas.

El mal desempeño económico trajo el descontento, y la población salió a manifestarse masivamente contra el Gobierno espoleando una crisis política sin precedentes desde la recuperación de la democracia. El 12 de mayo de 2016 –a semanas de los juegos olímpicos– el Senado abrió un juicio de impedimento contra la presidenta Dilma Rousseff. Esta ha quedado apartada de sus funciones hasta que se decida su posible destitución, tras un proceso que resolverá el Senado en menos de tres meses y puede coincidir con los juegos. Mientras tanto, el vicepresidente Michel Temer ocupa la presidencia con un Gobierno tan impopular o más que el anterior. El Comité Olímpico desconoce aún qué mandatario inaugurará los juegos. Situación inédita que no beneficia a la imagen del país.

Como colofón, meses antes del inicio de las competiciones estalló una crisis sanitaria a causa de la transmisión del virus del zika por picadas de mosquitos. Las consecuencias para la salud no están claras, pero la alerta saltó entre deportistas y turistas. Aunque los efectos sobre la participación de ambos serán limitados, el episodio reveló debilidades del sistema sanitario y las condiciones de vida de la población humilde.

¿Oportunidad perdida o apuesta fallida? Lo que quiso ser un escaparate del Brasil emergente, mostrando músculo para sus aspiraciones de potencia global, llegó en mal momento. Los juegos se celebrarán probablemente de forma satisfactoria, como los mundiales de fútbol, pero el efecto para la imagen del país quedará muy devaluado. Por ello es una oportunidad perdida. Además, las Olimpiadas no parecen contribuir a revitalizar la economía, ni a mejorar la calidad de vida, ni a dotar de infraestructuras que faciliten la cotidianeidad. Así que no parece una apuesta afortunada a dos años de unos costosos mundiales de fútbol. Ni se cumplieron las promesas, ni se calcularon de forma realista los costes, ni se contribuye a la inclusión social. Con todo, Río –la *Cidade Maravilhosa*– seguirá, y eso permanece.

